

## MESA REDONDA SOBRE ESTADO ACTUAL DEL TLC CON EEUU ICP - REVISTA SEMANA, 24 DE AGOSTO DE 2007

A la mesa redonda organizada por el Instituto de Ciencia Política y la Revista Semana, para conocer el estado actual del TLC con EEUU y la pertinencia y viabilidad de la estrategia de negociación que viene desarrollando el gobierno colombiano, asistieron:

### Invitados especiales

- Michael Shifter, Director Diálogo Interamericano (EEUU)
- Sandra Suárez, Alta Consejera Presidencial para asuntos internacionales y TLC

### Representantes de la misión de la sociedad civil en Washington

- Juan Sebastián Betancourt, Presidente Ejecutivo Proantioquia
- Carlos Eduardo Botero, Coordinador TLC ANDI
- Gloria María Borrero, Directora Ejecutiva Corporación Excelencia en la Justicia
- Alberto Echavarría, Director Jurídico ANDI

### Revista Semana

- Alfonso Cuellar, Editor general
- Lina Zuluaga, Directora de proyectos especiales
- Daniel Mera, Coordinador académico proyectos especiales

### Instituto de Ciencia Política

- Marcela Prieto Botero, Directora Ejecutiva (moderadora de la mesa)

En primer lugar **Sandra Suárez**, Alta consejera presidencial encargada del tema de TLC, hizo un diagnóstico general sobre el estado de la negociación con EEUU, mencionando que éste es un tema de política internacional que se ha desarrollado según se ha venido configurando la agenda y la relación entre demócratas y republicanos en ese país.

Con la variación de las mayorías en el congreso norteamericano, según Sandra Suárez, se ha evidenciado un cambio en las reglas de juego para la votación de los TLC, que no hubiera ocurrido si los republicanos siguieran liderando el legislativo. Esto se debe a que los demócratas tienen una agenda propia que marca distancia con la del partido de gobierno, especialmente en época electoral, y a que han venido surgiendo nuevos temas de debate, presionados por grupos de la sociedad civil pertenecientes a las bases del partido como los sindicatos, entre los que se destacan el respeto por los derechos laborales, la propiedad intelectual y los temas ambientales.

En el diagnóstico hecho por Sandra Suárez se mencionó cómo, hacia mediados de año, los demócratas decidieron aplazar la votación del TLC con Perú precisamente por los temas arriba enunciados, lo que hizo que se corriera toda la agenda de tratados comerciales con los otros países. Según su información se espera que para el 11 de septiembre se de el primer debate para el caso peruano, y que un mes después, alrededor del 20 de octubre, se esté votando esa iniciativa, que será punto de referencia para Colombia y los otros países.

En cuanto al caso colombiano, los demócratas han hecho énfasis en la precaria situación de los derechos humanos y laborales, los altos niveles de impunidad, la situación de vulnerabilidad de los sindicalistas, los escasos avances en la aplicación de la ley de justicia y paz, entre otros, y que se han convertido casi en requisito formal para la aprobación del tratado. De allí que el gobierno colombiano haya decidido presentar para aprobación del congreso los protocolos modificatorios al TLC, que buscan complementar y mejorar las medidas de protección frente a tales asuntos (el proyecto de ley acaba de ser radicado y será debatido de manera conjunta en ambas cámaras).

Adicionalmente el gobierno del presidente Uribe está empeñado en demostrar los buenos resultados de la política de seguridad democrática y de fortalecimiento de la presencia estatal, específicamente en términos de reducción de la violencia.

La estrategia de Colombia es mostrar con cifras en qué situación se encontraba el país, en qué se ha avanzado y hacia dónde se dirigen los esfuerzos gubernamentales, para lo cual cada una de las entidades del nivel nacional está recogiendo información. En el caso de la vicepresidencia, además, se está trabajando sobre las recomendaciones del informe de Andrew Samet sobre derechos laborales (“Libro Blanco Laboral”), y para la fiscalía y la rama judicial se ha contemplado un aumento de recursos provenientes del Plan Colombia y del presupuesto general de la nación, para atender temas sensibles como justicia y paz, la unidad de derechos humanos y los casos contra sindicalistas (ya se han emitido 50 condenas).

De otra parte se está haciendo un trabajo directo con algunos congresistas demócratas en la cámara, y a través de editoriales y medios de comunicación estadounidenses. El gobierno también está desarrollando una estrategia llamada “outside the beltway”, en que altos funcionarios como el Ministro de Comercio, el Canciller, el Vicepresidente, entre otros, están viajando a 25 ciudades de los EEUU a reunirse con congresistas, staffers y editorialistas de distintas tendencias; pues según Sandra Suárez los norteamericanos no conocen bien los avances en derechos humanos realizados por Colombia, aspecto sobre el cual el gobierno está concentrando su esfuerzo.

Finalmente Sandra Suárez mencionó la importancia de que diferentes actores de la sociedad civil y del sector productivo ayuden a hacer lobby ante el TLC, como lo han venido haciendo los judíos asentados en Colombia y las organizaciones privadas que participan en esta mesa de expertos.

En segundo lugar **Michael Shifter**, conocedor de primera mano del congreso norteamericano y de la situación de los países de América Latina, hablando a nombre propio (y no en nombre del Diálogo Interamericano) expresó su punto de vista sobre el TLC con Colombia, subrayando que éste no es el mejor momento para la firma del tratado, porque el Congreso norteamericano está siendo muy escéptico y muy crítico en especial en temas de derechos humanos, laborales y medioambientales y porque el Partido Demócrata de la época del Expresidente Bill Clinton, ya no es el mismo al actual.

Según Michael Shifter la calificación que le dan los demócratas al acuerdo NAFTA es negativa, y esto, más allá de ser justo o injusto, es un indicativo del poco interés de los miembros de éste partido con otros TLC. Para él hay un cambio en la realidad política de Washington: hay ansiedad, se combinan los temas comerciales con los de Irak y el terrorismo, y en general los demócratas están pasando su cuenta de cobro a los republicanos por no haber sido consultados en la legislatura pasada (en que los republicanos eran mayoría) sobre la firma de los tratados de libre comercio con Centro América. Ahora los 230 demócratas (frente a 200 republicanos) en el congreso, se preguntan por qué aprobar unos TLC que nos les fueron consultados y frente a los cuales no se les tuvo en cuenta, y para qué aprobarlos si en general las bases del partido, como los sindicatos, están en contra de tales acuerdos comerciales, al menos en el corto plazo.

Hay un panorama muy difícil para todos los TLC y Colombia cuenta con complicaciones adicionales: la persistencia del conflicto armado genera noticias preocupantes relacionadas con impunidad, injusticia y parapolítica, que causan mayor suspicacia entre los legisladores demócratas. Michael Shifter dijo que es probable que este año se dé la firma de los TLC de Perú y Panamá, pero

que se sorprendería si el de Colombia llegara a salir. No obstante, dice que a futuro el panorama se ve más despejado.

En cuanto al Plan Colombia, seguirá recibándose el paquete de ayuda de EEUU. Según Shifter, a los republicanos no les interesa quitarle el apoyo a Colombia -ni dejar de recibir su respaldo en la región-, por lo cual aunque se plantee un cambio de énfasis en las inversiones del plan (un mayor componente social), este va a contar con el visto bueno de las dos cámaras.

De otra parte ya para febrero de 2008 se habrán definido los nombres de los dos candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre, así que volverán a tratarse los temas legislativos que habían quedado aplazados este año. De mayo a junio, según el experto de Diálogo Interamericano, bajará la actividad electoral y se podrá volver a tocar el TLC con Colombia.

En todo caso, sugiere Shifter, lo que hay que hacer para garantizar avances es definir los benchmarks o metas e indicadores de avance del gobierno colombiano, que demuestren el real interés de éste en la lucha contra la violencia y la impunidad. Con estas metas e indicadores de avance bien definidos, sería posible cambiar la opinión de unos 10 o 12 congresistas aún indecisos. Es obvio que el no haber consultado a los demócratas sobre los TLC a firmar fue muy irresponsable por parte del gobierno de George W. Bush, así como ha sido irresponsable la posición de los demócratas en responder a esa coyuntura política. Es así que Colombia puede aprovechar el panorama para mostrar metas más claras a todos los congresistas. (Michael Shifter mencionó un estudio sobre el perfil y cómo votan cada uno de los congresistas estadounidenses, que podría ser de gran utilidad para el gobierno colombiano).

Después de las intervenciones de los dos invitados especiales, **Alberto Echavarría**, director jurídico de la ANDI, manifestó sus consideraciones frente a la situación del TLC con Colombia. Haciendo un buen resumen del proceso de inserción de Colombia en la economía internacional y del papel que en tal proceso han jugado los empresarios e industriales colombianos, manifestó cómo, a pesar de las grandes virtudes y de la necesidad urgente del TLC con EEUU, es necesario reconocer y tener en cuenta los intereses de grupos sociales de distinta índole, que parecen no beneficiarse directamente del tratado y que se están organizando en oposición a este.

Por ejemplo, la globalización y el libre comercio han cambiado las reglas de juego laborales, por lo que cada vez más los empleados acostumbrados a trabajos estables, a largo plazo y con poca cualificación se están viendo amenazados, y esa angustia, por supuesto, se refleja en un bajo respaldo a los TLC. No se pueden subestimar los costos de la gente que sufre, y eso lo han reconocido especialistas de toda clase, incluso los más férreos defensores de los tratados comerciales.

Continuando con la ronda de preguntas, **Alfonso Cuellar**, editor general de la Revista Semana, consultó a Sandra Suárez y Michael Shifter sobre los efectos positivos o no de las repetidas visitas del Presidente Uribe a Washington. En palabras de la representante del ejecutivo, las visitas fueron buenas aunque no se tiene previsto un nuevo viaje del Presidente. Lo que se espera es que sean ahora otros actores los que visiten el congreso norteamericano y los medios de comunicación, así como ha venido sucediendo. El gobierno colombiano seguirá manteniendo su interlocución y fortalecerá su impacto a través del trabajo de la embajada en Washington. Además, en los meses de agosto y septiembre, se esperan visitas de líderes norteamericanos que pueda llevar una opinión más directa y de primera mano de lo que ocurre en Colombia. Michael Shifter por su parte recordó que

el timing es fundamental, y que el país debe definir un momento propicio para ir a EEUU siempre y cuando tenga resultados y avances concretos que mostrar.

Tomando la palabra de nuevo, **Alberto Echavarría** de la ANDI manifestó que son necesarias acciones precisas a favor del TLC, y que debe existir una actitud colectiva pero liderada desde el ejecutivo en este sentido.

Frente al tema laboral específicamente, Echavarría propone seguir las recomendaciones del Libro Blanco de Andrew Samet, que muestra caminos específicos de acción como los presentados por la OIT<sup>1</sup>. Esta organización internacional ha mostrado muy buena voluntad en ayudar a Colombia a mejorar sus estándares internacionales en materia laboral, por ejemplo a través los de programas de cooperación tripartitos entre gobierno, empresarios y trabajadores, que pretenden desarrollarse a mediados de septiembre.

Según el Director Jurídico de la ANDI hay que construir una hoja de ruta y metas específicas a alcanzar a mediano y largo plazo, más que resultados concretos a corto plazo que seguramente serán difíciles de lograr por la situación de conflicto armado. Se debe pedir apoyo técnico y financiero a la comunidad internacional para la reforma al sistema de justicia, y para asuntos laborales como mecanismos más expeditos de solución de controversias. Es necesaria una mayor decisión política y económica tanto del gobierno como de otros sectores involucrados, para que el TLC con EEUU sea una realidad.

Ya para finalizar, Alberto Echavarría subrayó la urgencia de fortalecer el Ministerio de Justicia separándolo del Ministerio del Interior y dándole nuevamente autonomía política y financiera, para enviar el mensaje de estar trabajando seriamente en el fortalecimiento del sistema de justicia y la lucha contra la impunidad en Colombia. En el mismo sentido se pronunciaron los demás asistentes a la mesa, en particular **Gloria María Borrero**, Directora Ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia, al indicar que la justicia debe ser una política de Estado y que debe haber un mayor acompañamiento -y evaluación- a lo que están haciendo jueces y fiscales desde el punto de vista judicial y presupuestal.

Como cierre de la mesa de expertos, **Juan Sebastián Betancourt**, Presidente Ejecutivo de Proantioquia, expresó que la gran conclusión del viaje realizado por la comisión de la sociedad civil a Washington el 12 y 13 de junio pasados, liderada por el Instituto de Ciencia Política, fue la necesidad de demostrar los esfuerzos de Colombia en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos humanos.

Las nuevas visitas a Washington, dijo, deberán ir acompañadas de acciones concretas frente a la parapolítica, la muerte o amenaza a sindicalistas y el fortalecimiento del aparato de justicia en nuestro país, para poder hacer alguna mella en la decisión de los demócratas. No hay que olvidar que la propuesta de revivir el Ministerio de Justicia ya se le hizo a la Embajadora Carolina Barco en esa ocasión, y se le ha hecho en repetidas oportunidades al Presidente de la República, incluso al ser aprobada la iniciativa en la última asamblea general de la ANDI en Cartagena.

---

<sup>1</sup> El Libro Blanco Laboral es un documento evaluativo realizado por consultores independientes con el apoyo financiero del BID, para países que están en trámite de firmar un TLC con EEUU. El libro recoge los avances en materia de derechos laborales y plantea una serie de recomendaciones de carácter específico y estructural, para que los países firmantes del tratado se adecuen a las normas estipuladas por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. En el caso colombiano el informe fue preparado por Andrew Samet, de la firma de abogados Sandler, Travis & Rosenberg.

Hay un tema filosófico de fondo con los demócratas, que no apoyan el TLC; sin embargo Betancourt considera que hay voluntad política por parte de los congresistas norteamericanos para ayudar a Colombia en temas de justicia. Si bien hay que reconocer que parte de las dificultades del sector justicia las da el mismo contexto de conflicto armado, esta no puede ser una justificación para no hacer nada.

Antes de despedir a los invitados, la moderadora de la mesa, **Marcela Prieto Botero**, recordó que el TLC también tiene componentes políticos, y que a través de la discusión de asuntos puntuales coyunturales referidos al comercio, han salido a relucir otras problemáticas estructurales del país que es necesario estudiar y atender. Eso deja el camino abierto para que el gobierno y la sociedad civil sigan en su lucha por fortalecer el Estado de derecho y la inserción económica de Colombia en el exterior.